

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y CAPACIDAD PARA SUCEDER

Concepto de Suceder y Herencia

En su acepción jurídica de mayor amplitud, el vocablo "suceder" implica un fenómeno de subrogación personal o sustitución subjetiva, en virtud del cual un sujeto asume la posición jurídica que ocupaba otro en una determinada relación de derecho, adquiriendo sus facultades y cargas sin que dicha relación altere su identidad objetiva.

La doctrina clásica distingue nítidamente este concepto de otras formas de adquisición patrimonial como la compraventa. En un contrato traslativo de dominio inter vivos, el comprador adquiere un bien específico de manera aislada y singular, pero de ninguna manera sucede al vendedor en la totalidad de sus relaciones jurídicas globales, deudas o estado civil.

En un sentido estricto y restringido, la sucesión se circunscribe a la transmisión patrimonial universal operada por causa de muerte (mortis causa), identificándose de forma técnico-jurídica con la institución de la herencia. El Código Civil del Estado de México conceptualiza formalmente a la herencia como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Por consiguiente, la herencia es calificada unánimemente por la doctrina como una auténtica universalidad de derecho (universitas iuris), comprensiva tanto del activo como del pasivo del de cujus.

La regla general del derecho sucesorio mexiquense postula la trascendencia y transmisibilidad de los derechos y obligaciones a la muerte de su titular. No obstante, el propio legislador establece excepciones expresas respecto de aquellas relaciones de carácter personalísimo que se extinguen indisolublemente con el deceso de la persona física. Estas excepciones se agrupan en las siguientes categorías:

Derechos Reales Limitados: El usufructo, el uso y el derecho de habitación, los cuales son esencialmente vitalicios salvo pacto en contrario.

Relaciones y Atributos de Familia: Las potestades y deberes inherentes al parentesco, el matrimonio, la tutela y la patria potestad.

Contratos Celebrados Intuitu Personae: El contrato de mandato y la prestación de servicios profesionales, cuyas obligaciones fenecen ante la muerte del mandatario o prestador por haberse contratado en atención a sus cualidades individuales.

Derechos Políticos y Personales: El derecho al sufragio activo y pasivo, la nacionalidad, el estado civil, los derechos de acción penal y las prerrogativas de la ciudadanía.

Especies de Sucesiones

El ordenamiento civil del Estado de México clasifica los regímenes sucesorios bajo dos criterios fundamentales de índole sustantiva y adjetiva:

Por la manifestación de la voluntad del autor de la sucesión:

Testamentaria: Es aquella que se rige de forma primordial por la voluntad expresa, libre y solemne del testador, plasmada en un instrumento jurídico válido denominado testamento. La voluntad del autor es la ley suprema de la sucesión, topando como único límite la obligación legal de asegurar alimentos a los acreedores alimentarios.

Legítima o Intestada (Ab-Intestato): Opera de manera supletoria a falta de un testamento válido o eficaz. En este supuesto, el legislador interviene diseñando un ordenamiento de distribución basado en la presunción de la voluntad del difunto, privilegiando los lazos de consanguinidad y solidaridad familiar.

Mixta: Se actualiza cuando el testador no dispuso de la totalidad de su patrimonio en el testamento legítimo, o cuando la institución de heredero sobre una fracción de los bienes quedó sin efectos. En estas hipótesis, una porción de la masa se liquida conforme a las cláusulas testamentarias y el remanente se distribuye de acuerdo con las reglas de la sucesión legítima.

Por la naturaleza del procedimiento formalizado:

Judicial: Es el procedimiento ordinario que se tramita ante los Juzgados de lo Familiar del Estado de México. Es de observancia obligatoria siempre que existan controversias entre los interesados, participen menores de edad, personas sujetas a interdicción o el fisco estatal reivindique la masa hereditaria.

Extrajudicial o Notarial: Constituye una vía simplificada y de naturaleza no contenciosa. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México faculta a los Notarios Públicos del Estado a tramitar la sucesión exclusivamente cuando todos los herederos instituidos sean mayores de edad, gocen de plena capacidad jurídica, exista un acuerdo unánime sobre la partición de bienes y no se presente controversia alguna.

Fundamentación y Modos de Suceder

El sustento axiológico y filosófico del derecho sucesorio moderno se arraiga en su intrínseca función socioeconómica, operando como una de las columnas vertebrales de la propiedad privada. La doctrina civilista recoge la clásica premisa de Adolphe Thiers, quien sostenía que el derecho de propiedad despliega sus mejores efectos

económicos y estimula la productividad social cuando es completo, personal y, fundamentalmente, hereditario.

Bajo esta perspectiva, el ser humano no cesa su actividad económica ni detiene la acumulación de riqueza al colmar sus necesidades biológicas básicas inmediatas; al contrario, continúa produciendo con el firme incentivo psicológico y moral de asegurar el bienestar material de sus descendientes y seres queridos tras su desaparición física. La sucesión hereditaria estabiliza las relaciones económicas del mercado, impidiendo que la muerte de un titular convierta sus bienes en cosas de nadie (*res nullius*) o provoque la parálisis de las unidades productivas.

Posesión de los Bienes Hereditarios y Desposesión Material

Un aspecto de medular importancia en la praxis jurídica civil del Estado de México estriba en la distinción teórica de las calidades posesorias sobre el haber hereditario. Por ministerio de ley, los herederos legítimos o testamentarios adquieren la posesión originaria sobre la parte alícuota de los bienes desde el instante preciso del fallecimiento del autor de la sucesión. Este principio de transmisión inmediata de la delación hereditaria otorga a los herederos la titularidad jurídica del patrimonio, aun antes de que se realicen los inventarios y avalúos.

En contraposición a la naturaleza jurídica del heredero, el albacea (representante legal e instrumental de la sucesión) detenta una posesión derivada. El albacea no es propietario ni poseedor civil en nombre propio; actúa estrictamente como un custodio y administrador temporal de los bienes con el fin de liquidar el pasivo, cobrar los créditos y preparar la partición definitiva. Por su parte, el cónyuge supérstite conserva la posesión derivada del fondo social derivado de la sociedad conyugal bajo la estricta intervención del representante de la sucesión, salvaguardando sus derechos gananciales hasta la total liquidación de la masa.

Característica Esencial de la Transmisión y el Fenómeno de Conmorcencia

La transmisión hereditaria exige rigurosamente la concurrencia de dos extremos temporales básicos: la preexistencia real de un muerto (*el de cujus*) y la existencia material de por lo menos un causahabiente vivo y dotado de capacidad jurídica para suceder. Este presupuesto da origen al análisis de la conmorencia.

Si el autor de la sucesión y sus presuntos herederos o legatarios perecen en un mismo acontecimiento catastrófico (un accidente automovilístico, un desastre natural) o inclusive en un mismo día, sin que existan elementos científicos o probatorios contundentes para determinar con precisión cronológica quién falleció primero, la ley mexicana aplica una presunción legal absoluta de muerte simultánea. En

consecuencia, al tenerse por muertos al mismo tiempo, queda anulada toda posibilidad de transmisión hereditaria recíproca entre ellos, y los bienes de cada uno pasarán directamente a sus respectivos parientes sobrevivientes según el orden de prelación legal.

Capacidad e Incapacidad para Suceder (Indignidades)

El postulado fundamental del ordenamiento del Estado de México determina que la capacidad jurídica es la regla general: todos los habitantes de la entidad, con independencia de su edad, sexo o nacionalidad, gozan de capacidad para suceder y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto. Las restricciones a esta prerrogativa revisten un carácter estrictamente excepcional, son de aplicación restrictiva y se clasifican puntualmente por el legislador bajo los siguientes supuestos:

Falta de Personalidad

Aplica a aquellos individuos que no se encuentren debidamente concebidos al momento de la muerte del autor de la herencia. Asimismo, comprende a los concebidos (nasciturus) que no lleguen a nacer vivos y viables, entendiéndose por viabilidad que el feto sea desprendido enteramente del seno materno y sobreviva de forma independiente veinticuatro horas, o sea presentado vivo ante el oficial del Registro Civil.

Presunción de Influjo Contrario a la Libertad

Medida profiláctica destinada a tutelar la pureza de la última voluntad. Priva de la capacidad de suceder por testamento a los médicos que hubieren asistido al testador durante su última enfermedad si fue en ese lapso cuando se otorgó el testamento, extendiéndose la prohibición a los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos de los facultativos. De igual forma, se sanciona a los ministros de culto y a las iglesias a las que pertenezcan.

Presunción de Influjo sobre la Verdad e Integridad

Se dirige a salvaguardar la autenticidad formal del instrumento. Declara incapaces de suceder al Notario Público y a los testigos instrumentales que hubieren intervenido directamente en la facción y otorgamiento del testamento, afectando igualmente a sus parientes en línea recta o colateral consanguínea.

Falta de Reciprocidad Internacional

Es una limitación fundada en la soberanía estatal. Impide heredar a los ciudadanos extranjeros cuyos países de origen prohíban, restrinjan o no reconozcan el derecho de

los ciudadanos mexicanos a suceder dentro de sus territorios en condiciones de equidad.

Utilidad Pública

Restricciones impuestas por el Estado encaminadas a la salvaguarda de intereses colectivos, orden público o fines de beneficio social, impidiendo la concentración desmedida de ciertos bienes en corporaciones o entes específicos.

Por causa de delito (Indignidades)

Consiste en la pérdida del derecho a heredar como sanción civil ante la comisión de actos delictivos o conductas reprobables en contra del de cujus, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge. El CCEM sanciona severamente supuestos como el homicidio o intento del mismo, la acusación calumniosa, la prostitución de los hijos y el abandono de los menores expósitos.

Es indispensable precisar la distinción teórica existente entre las incapacidades por falta de personalidad o influjo contrario, y las indignidades derivadas de la comisión de un ilícito o falta moral. Mientras que las incapacidades puras operan de pleno derecho por razones de orden público o protección de las formas solemnes y no admiten subsanación, las indignidades constituyen un castigo privado que puede ser enteramente purgado.

La legislación del Estado de México prevé que la incapacidad por indignidad queda sin efecto si, una vez cometido el acto reproable, el autor de la herencia rehabilita expresamente al ofensor mediante instrumento público o testamento posterior, o bien, de forma tácita cuando conociendo fehacientemente la existencia del delito o agravio, instituye formalmente al infractor como su heredero o legatario sin manifestar reserva alguna.

CAPÍTULO II. SUCESIÓN LEGÍTIMA (AB-INTESTATO)

La sucesión legítima, también conocida en la tradición jurídica romancista como sucesión ab-intestato, constituye el régimen supletorio instituido por el legislador para regular la transmisión de la masa hereditaria, derechos y obligaciones de una persona física cuando esta fallece sin haber expresado válidamente su última voluntad. Este ordenamiento no opera como una imposición arbitraria del Estado, sino como una

presunción legal de la voluntad del de cujus, estructurada sobre los lazos de solidaridad familiar, afecto y proximidad consanguínea.

De conformidad con el Código Civil del Estado de México (CCEM), la sucesión legítima no es un orden excluyente en su totalidad respecto de la testamentaria; ambos regímenes pueden coexistir armónicamente sobre un mismo caudal patrimonial cuando el testador no hubiere dispuesto de la totalidad de sus bienes (sucesión mixta).

Supuestos de Apertura de la Sucesión Legítima

El formalismo del derecho sucesorio mexiquense determina con precisión numerus clausus las hipótesis jurídicas bajo las cuales debe abrirse el procedimiento sucesorio intestado, consagradas en el marco doctrinal y normativo del Estado de México. El origen de esta apertura radica en la ineficacia, inexistencia o insuficiencia de la manifestación testamentaria:

Inexistencia de Testamento: El de cujus falleció sin otorgar disposición de última voluntad bajo ninguna de las formas previstas por la ley. Es el supuesto ordinario y más recurrente en la praxis jurídica.

Nulidad del Testamento Otorgado: Cuando el instrumento padece de vicios formales insubsanables, fue dictado bajo coacción, violencia, dolo, o por un sujeto privado de sus facultades mentales plenas, declarándose inválido mediante sentencia judicial ejecutoriada.

Pérdida de Validez (Caducidad): El testamento, habiendo sido válido en su origen, pierde su eficacia por un evento superveniente, como la destrucción del testamento cerrado o el transcurso del tiempo en testamentos especiales.

Disposición Parcial de Bienes: El testador hace uso de su derecho a testar, pero solo instituye legados o herederos sobre una fracción determinada de su patrimonio. En este escenario, la parte no especificada se regirá rigurosamente por las reglas del intestado (sucesión mixta).

Incumplimiento de la Condición Suspensiva: Si la institución de heredero quedó supeditada a un acontecimiento futuro e incierto y este no se materializa en los términos dispuestos.

Falta de Heredero Instituido sin Sustituto: Se actualiza en tres vertientes: premoriencia (el heredero fallece antes que el testador), repudiación (el instituido rechaza formalmente la delación de la herencia) o incapacidad jurídica para heredar (por delitos, ingratitud o razones de orden público), siempre y cuando el testador no hubiere designado un heredero sustituto.

Nota Fundamental del CCEM: El juicio sucesorio intestamentario se tramita formalmente ante un Juez de lo Familiar del distrito correspondiente al último domicilio del finado, o bien, mediante procedimiento no contencioso ante Notario Público si todos los herederos son mayores de edad y no existe controversia alguna entre ellos.

Reglas Generales y Modos de Suceder

La distribución de la masa hereditaria en la sucesión legítima se rige por principios universales del derecho civil que buscan salvaguardar la equidad. El postulado cardinal es: 'los parientes más próximos excluyen a los más lejanos'. Es decir, la existencia de hijos extingue el derecho de los hermanos, y la presencia de los padres limita el acceso de colaterales.

No obstante, este principio cuenta con la salvedad del derecho de representación (o derecho de stirpe) en la línea recta descendente y en la colateral de forma restrictiva. Para materializar la partición del haber, la doctrina del Estado de México y el derecho civil clásico clasifican tres modos técnicos de suceder:

Sucesión por Cabezas (In Capita)

Se verifica cuando los herederos concurren al llamamiento judicial por derecho propio y se encuentran en el mismo grado de parentesco respecto del autor de la sucesión. El prototipo de esta modalidad ocurre cuando heredan directamente los hijos del de cujus. Mecánicamente, el caudal hereditario líquido se divide en tantas partes iguales como personas físicas con derecho concurren a la masa.

Sucesión por Estirpes (In Stirpes o Derecho de Representación)

Es una institución tuitiva del derecho de familia. Opera cuando un heredero expedito premuere, es declarado incapaz o abdica de su derecho mediante la repudiación. En estos supuestos, la ley convoca a sus descendientes directos para que subentren en la posición jurídica de su ascendiente excluido. La masa que le correspondía a la 'cabeza' original no se multiplica, sino que se asigna en bloque a la 'estirpe' (sus hijos, es decir, los nietos del autor), quienes a su vez dividirán esa porción específica en partes iguales entre ellos.

Sucesión por Líneas

Esta modalidad es de aplicación excepcional y opera únicamente cuando no existen descendientes ni cónyuge supérstite, y la delación recae en los ascendientes de segundo o ulterior grado (abuelos, bisabuelos). El sistema legal divide el patrimonio estrictamente en dos partes equivalentes: 50% para la línea materna y 50% para la

línea paterna, con total independencia del número de parientes vivos que integren cada una de las líneas.

Por Cabezas

Hijos u otros parientes de igual grado próximo. División equitativa en partes idénticas por individuo.

Por Estirpes

Nietos y sobrinos (Derecho de representación). La porción del excluido se asigna y divide entre sus hijos.

Por Líneas

Ascendientes de segundo o ulterior grado (Abuelos). 50% fijo a línea paterna y 50% a línea materna.

Orden de Preferencia Detallado en la Sucesión Mexiquense

El Código Civil del Estado de México estatuye una prelación rigurosa de orden público para determinar qué personas tienen derecho a reclamar la herencia legítima. Este orden es piramidal y excluyente:

Los Descendientes y las Reglas de Concurrencia con el Cónyuge

Los hijos gozan de primacía absoluta. Si concurren únicamente hijos, la división se hace por cabezas. Si concurren hijos con nietos (por fallecimiento del padre de estos últimos), los hijos heredan por cabeza y los nietos por estirpe. Un aspecto de alta relevancia teórica es la concurrencia del cónyuge supérstite con los hijos:

Si el cónyuge carece de bienes propios al momento del fallecimiento del autor, o los que posee no igualan la porción que por concepto de herencia le correspondería a un hijo, tendrá derecho a recibir una porción exactamente igual a la de un hijo (hereda como un hijo más).

Si los bienes del cónyuge supérstite son inferiores a la porción de un hijo, solo heredará la cantidad necesaria para nivelar sus bienes con dicha porción hereditaria.

El Cónyuge o Concubino Supérstite en Ausencia de Descendientes

La legislación del Estado de México dota de una protección robusta al cónyuge o concubino supérstite, rompiendo esquemas antiguos que supeditaban al consorte frente a los ascendientes familiares. Sus reglas de distribución son estricta materia procesal civil:

Concurrencia con Ascendientes: A falta de hijos, si al de cujus le sobreviven sus padres (ascendientes) y su cónyuge, la herencia se fractura por ministerio de ley en dos partes iguales: 50% para el cónyuge y 50% para los ascendientes. Aquí no importa si el cónyuge posee o no fortuna propia.

Concurrencia con Hermanos: Si el difunto no dejó descendientes ni ascendientes, pero sí hermanos, el cónyuge o concubino es privilegiado con las dos terceras partes (66.66%) de la masa líquida, mientras que el tercio restante (33.33%) se distribuirá entre los hermanos del finado.

Concurrencia con Otros Colaterales: A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge o concubino supérstite desplaza a todos los demás colaterales (tíos, primos), adquiriendo el carácter de heredero universal de la totalidad del caudal patrimonial.

Los Ascendientes

A falta de posteridad (descendientes) y de consorte, los padres del de cujus son llamados a la sucesión. Si ambos progenitores viven, la masa se divide en partes iguales. En caso de que solo sobreviva uno de ellos, este absorberá la totalidad de la herencia, extinguiendo cualquier pretensión de otros parientes de grado más remoto.

Los Colaterales y el Doble Vínculo

Los parientes colaterales acceden a la sucesión legítima únicamente a falta de descendientes, cónyuge/concubino y ascendientes. El orden jerárquico interno de la línea colateral se estructura de la siguiente manera:

Hermanos: Heredan por partes iguales si todos son del mismo vínculo. Sin embargo, el CCEM contempla una distinción de origen romano: si concurren hermanos de doble vínculo (hermanos de padre y madre) con medios hermanos (consanguíneos solo por vía paterna o uterinos solo por vía materna), los hermanos de doble vínculo recibirán por mandato legal el doble de la porción asignada a los medios hermanos.

Sobrinos: Si fallece un hermano antes que el de cujus, sus hijos (sobrinos del autor) concurren a la herencia por estirpe, bajo el principio de representación colateral, recibiendo de forma conjunta la parte de su padre premuerto.

Colaterales Ordinarios hasta el Cuarto Grado: A falta de hermanos y sobrinos, la ley convoca a los parientes en línea colateral más próximos hasta el cuarto grado inclusive

(primos hermanos, tíos abuelos). Más allá del cuarto grado, el vínculo del parentesco carece de efectos sucesorios ab-intestato.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México

En última instancia, ante la absoluta inexistencia de herederos consanguíneos dentro de los límites de ley (cuarto grado), de cónyuge o de concubino con derecho a suceder, el legislador mexiquense determina que los bienes no deben quedar en el desamparo o el abandono jurídico. Por ende, se instituye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) como heredero universal y legítimo. Los bienes adjudicados a esta institución pública se destinan por ley a programas de asistencia social y beneficio de sectores vulnerables dentro de la entidad.

CAPÍTULO III. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Definición Dogmática y Legal del Testamento

El estudio del derecho sucesorio mexicano exige discernir con absoluta precisión la naturaleza jurídica del testamento, tanto desde el prisma doctrinal como desde su formalización positiva. Tradicionalmente, la doctrina científica define al testamento como un acto jurídico solemne, unilateral, personalísimo, revocable y libre, ejecutado por una persona física dotada de capacidad legal, mediante el cual dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes específicos para surtir efectos después de su muerte.

La coincidencia entre la teorización de tratadistas como Ernesto Gutiérrez y González, Rafael Rojina Villegas y Antonio de Ibarrola, con el derecho positivo mexiquense, demuestra que el testamento no es un mero contrato de transferencia patrimonial ni un trámite administrativo ordinario. Es, por el contrario, la máxima expresión de la soberanía de la voluntad individual en el plano civil, cuya validez jurídica depende de la subordinación absoluta a las reglas de orden público fijadas por el legislador.

Características Esenciales del Testamento en el Estado de México

A partir del análisis sistemático de la doctrina y de las directrices normativas del Libro Sexto del Código Civil mexiquense, se desprenden y profundizan las características pilares que configuran este acto jurídico:

Unilateralidad

El testamento es un acto jurídico estrictamente unilateral porque, para nacer a la vida del derecho y surtir sus plenos efectos, basta de manera exclusiva con la emisión de la voluntad de un solo sujeto: el testador. A diferencia de los contratos, no requiere la aceptación sincrónica ni el consentimiento de los herederos o legatarios en el momento de su otorgamiento. En perfecta consonancia, la legislación sustantiva del Estado de México prohíbe de forma tajante los testamentos recíprocos o mancomunados en un mismo instrumento. Esta prohibición resguarda la independencia absoluta de la voluntad, impidiendo que el fallecimiento de uno vincule de manera indisoluble o coaccionada las decisiones patrimoniales del supérstite.

Carácter Personalísimo

Esta propiedad implica una restricción absoluta a la representación legal o convencional. El testador debe acudir por sí mismo, en plena presencialidad, a manifestar sus designios. El ordenamiento jurídico del Estado de México veta cualquier intento de otorgar testamento mediante apoderado, mandatario o representante legal. Asimismo, la ley dictamina que no puede dejarse al arbitrio de un tercero la designación de los herederos o legatarios, ni la determinación de las cuotas o porciones que les correspondan. La única excepción admitida en la doctrina y recogida lateralmente por la ley es la facultad que tiene el testador de encomendar a un tercero la distribución de cantidades legadas a clases analíticas o ilimitadas (por ejemplo, "los pobres de un municipio" o "instituciones de beneficencia de Toluca"), así como la elección de los establecimientos específicos a los que se destinarán dichos fondos.

Revocabilidad Absoluta e Irrenunciable

El testamento es un acto esencialmente precario y mudable. El testador retiene un derecho absoluto, permanente e inalienable de modificar, sustituir o dejar sin efectos sus disposiciones testamentarias en cualquier momento de su existencia, concluyendo dicha potestad únicamente con su muerte. El Código Civil del Estado de México estipula que cualquier cláusula donde el testador renuncie a su derecho de revocar, o donde se obligue a no testar bajo ciertas condiciones, se tendrá por no puesta y carecerá de validez. Desde el punto de vista normativo, la expedición de un testamento posterior válido revoca de pleno derecho al anterior, a menos que el testador plasme explícitamente en el nuevo instrumento su voluntad de que el primero subsista en todo o en parte, generándose así una coexistencia testamentaria armonizada.

Libertad de Otorgamiento

La voluntad del testador debe ser inmune a cualquier elemento exógeno perturbador. Cualquier acto que involucre coacción física, violencia moral, dolo, mala fe o fraude anula de forma total el testamento. Los autores clásicos destacan que el legislador protege la espontaneidad y la pureza de la manifestación volitiva. En el territorio del Estado de México, el fedatario público tiene la obligación civil y notarial rigurosa de certificar que el testador se encuentra libre de toda opresión ostensible y en el uso cabal de sus capacidades cognitivas al instante del acto.

Solemnidad Elevada a Requisito de Existencia

Mientras que en la contratación civil rige la regla general del consensualismo, en el testamento la forma se eleva a rango de solemnidad esencial. El incumplimiento exacto y minucioso de las formalidades prescritas por el Código Civil del Estado de México para cada tipo de testamento acarrea indefectiblemente la nulidad absoluta del acto. La solemnidad no constituye un mero capricho burocrático; representa la salvaguarda pública de la autenticidad de la última voluntad, garantizando que el documento no sea falsificado, alterado o suplantado una vez que el autor de la sucesión haya fallecido y no pueda defender su texto.

Clasificación de los Testamentos en la Legislación Mexiquense

Ordinarios (Otorgados en condiciones normales de vida)

Público Abierto

Se dicta y formaliza directamente ante Notario Público en ejercicio. Es el más común, seguro y utilizado.

Redacción en protocolo. Por regla general no requiere testigos, salvo si el testador no sabe/puede firmar, es ciego/sordo, no habla español, o el notario lo exige.

Público Cerrado

Redactado en secreto por el testador o un tercero. El contenido se desconoce hasta la apertura judicial.

Papel cerrado y sellado. Presentación ante Notario y tres testigos instrumentales que firman la cubierta junto al testador.

Público Simplificado

Se instituyen legatarios respecto a un inmueble destinado a vivienda en la misma escritura de adquisición.

Otorgado simultáneamente con la escrituración de compraventa o adjudicación del bien raíz ante fedatario.

Ológrafo

Escrito enteramente de puño y letra por el testador mayor de edad para preservar el secreto total.

Elaborado por duplicado con huella digital. Debe ser depositado personalmente por el autor en el Archivo General de Notarías.

Específicos / Especiales (Ante situaciones de emergencia o excepción)

Privado

Admitido por enfermedad grave o peligro de muerte que impida la concurrencia de un Notario.

Manifestación de voluntad ante cinco testigos idóneos (o tres en extrema urgencia). Caduca si el testador sobrevive.

Militar Para miembros del ejército en campaña, operaciones bélicas o heridos en combate.

Declaración oral o entrega de pliego cerrado ante dos testigos o un oficial de rango jerárquico superior.

Marítimo

Para personas a bordo de navíos de la Marina Nacional (guerra o mercante) durante travesías de alta mar.

Redacción por duplicado ante el Capitán del barco y dos testigos. Debe registrarse en el diario de navegación.

Hecho en País Extranjero

Formulado fuera del territorio mexicano por ciudadanos nacionales conforme a leyes locales o diplomáticas.

Produce efectos en el Estado de México si fue otorgado según las leyes del país de origen o ante Ministros Plenipotenciarios y Cónsules.

De conformidad con la estructura codificada del Estado de México, los testamentos se dividen de manera primordial en dos grandes categorías: Ordinarios y Especiales. A continuación, se detalla su régimen dogmático y legal:

Las Disposiciones "Anómalas" o Especiales de Naturaleza Federal

Es imperativo para el jurista distinguir los testamentos civiles de los denominados "testamentos anómalos o específicos", los cuales no se rigen por los códigos civiles de los estados, sino por leyes e instituciones de carácter federal:

Bancario y Bursátil: Con fundamento en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, los titulares de cuentas de depósito o contratos de intermediación bursátil pueden designar beneficiarios directos. Al fallecer el titular, la institución entrega los fondos directamente a los beneficiarios sin necesidad de tramitar el juicio sucesorio civil.

Agrario: Con base en el Artículo 17 de la Ley Agraria, los ejidatarios y comuneros formulan una "lista de sucesión" en la que designan el orden de preferencia de las personas que heredarán sus derechos parcelarios, depositando dicha lista en el Registro Agrario Nacional (RAN).

Sujetos del Derecho Sucesorio Testamentario: Heredero y Legatario

La doctrina clásica de Rojina Villegas traza una línea divisoria tajante entre las dos calidades de adquirentes mortis causa, distinción plenamente recogida en el articulado del Estado de México:

El Heredero es instituido a título universal. Esto significa que subentra en la totalidad del patrimonio transmisible del de cujus o en una parte alícuota de este (por ejemplo, la mitad o un tercio). El heredero no solo adquiere los bienes y derechos, sino que asume de forma solidaria la responsabilidad del pasivo de la herencia (deudas, cargas fiscales y obligaciones). No obstante, goza por ministerio de ley del beneficio de inventario, lo que implica que solo responde de las deudas del causante hasta donde alcance el valor de los bienes recibidos, protegiendo así su patrimonio propio.

Por su parte, el Legatario es un adquirente a título particular. Su institución se circunscribe de forma exclusiva a un bien objeto o a un derecho nítidamente especificado por el testador. El legatario no guarda responsabilidad general sobre las deudas del caudal hereditario, salvo en dos supuestos excepcionales: cuando toda la masa hereditaria haya sido distribuida por el testador en legados, o cuando los bienes de los herederos resulten insolventes para cubrir los pasivos, operando el legado en subsidio de la sucesión.

Modalidades Aplicables a las Instituciones

El testador mexiquense es libre de sujetar la institución de sus sucesores a diversas modalidades, respetando las fronteras del orden público:

Institución Sub-causa: Es aquella donde el testador expone expresamente el motivo que determinó su nombramiento. Si dicho motivo resulta comprobadamente erróneo o falso, la institución se ve afectada de nulidad total, puesto que la voluntad estuvo viciada en su origen.

Institución Sujeta a Condición: Puede someterse a condiciones suspensivas o resolutorias de hechos futuros e inciertos. No obstante, las condiciones imposibles de cumplir, las que atenten contra las libertades individuales (como la obligación permanente de no contraer matrimonio) o las ilícitas, se tienen por no puestas, manteniendo la validez del nombramiento sin la carga.

Institución Sujeta a Carga o Modo: Consiste en imponer al heredero o legatario una obligación de hacer, dar o no hacer algo en beneficio de un tercero o del propio testador (por ejemplo, destinar una pensión mensual a un pariente o edificar un mausoleo). El costo de la carga jamás podrá exceder el valor económico de lo recibido en la herencia.

Ineficacias de las Disposiciones Testamentarias

El testamento, a pesar de cumplir inicialmente con los parámetros de ley, puede verse privado de sus efectos jurídicos debido a causas intrínsecas o sobrevenidas. El Código Civil del Estado de México regula meticulosamente estas ineficacias:

Nulidad

Se actualiza cuando el acto nace con un vicio congénito y estructural. El ordenamiento mexiquense sanciona con nulidad absoluta el testamento otorgado bajo el influjo de la violencia física o moral, el dolo, la mala fe o el fraude. Asimismo, es nulo el testamento dictado por un menor de dieciséis años o por personas que no disfruten de su pleno y lúcido juicio. Como criterio jurisprudencial sustentado en los tribunales del Estado de México (Semanario Judicial de la Federación), la acción de nulidad por incapacidad mental en materia de testamentos es imprescriptible y no conmutable, dado que el orden público impide convalidar un acto carente de voluntad real.

Revocación

Es la ineficacia que deviene de la propia potestad soberana del testador. Consiste en la extinción deliberada de los efectos de un testamento por la emisión de un nuevo instrumento posterior formalizado con los mismos requisitos de solemnidad legales.

Caducidad

A diferencia de la nulidad, la caducidad presupone un testamento perfectamente válido en su estructura y origen, pero que se torna ineficaz por causas ajenas a la

voluntad del testador y de carácter superveniente a su celebración. Ocurre cuando el heredero o legatario instituido fallece antes que el testador, repudia la herencia mediante manifestación formal, o incurre en una de las causas legales de incapacidad para heredar (como delitos graves contra el testador o presunción de influjo contrario a la libertad de testar).

Inoficiosidad

Constituye una limitación de orden público a la libertad absoluta de testar. Un testamento es calificado como inoficioso en el Estado de México cuando el testador omite o incumple su obligación jurídica ineludible de proveer alimentos a sus acreedores alimentarios legítimos (hijos menores de edad, hijos mayores con incapacidad, cónyuge o concubina imposibilitada para trabajar, o ascendientes de subsistencia precaria). Cabe resaltar que la inoficiosidad no produce la invalidez o destrucción completa del testamento; este subsiste en todas sus cláusulas, pero es objeto de una reducción económica proporcional y estricta en la masa de bienes a efecto de garantizar la cobertura integral de las pensiones alimenticias adeudadas.

CAPÍTULO IV Y V. REGLAS DEL HIJO PÓSTUMO, ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN

Régimen Jurídico y Protección del Hijo Póstumo

El derecho sucesorio no solo regula la transmisión patrimonial hacia los sujetos vivos al momento de la muerte del causante, sino que extiende su esfera protectora hacia aquellos que, estando concebidos, nacen con posterioridad a dicho suceso. Dogmáticamente, el hijo póstumo es el descendiente que nace tras el fallecimiento del autor de la herencia, encontrándose protegido desde el periodo de gestación bajo el amparo de la ficción jurídica contenida en los principios generales del derecho, la cual determina que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le benefician (*nasciturus pro iam nato habetur*).

En el marco normativo del Código Civil del Estado de México, esta protección adquiere un carácter prioritario de orden público para salvaguardar el derecho a heredar del nuevo ser y evitar maniobras fraudulentas orientadas a diluir o suprimir su cuota hereditaria. El Código regula las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda o concubina declara quedar encinta.

Obligación de Aviso Judicial y Plazos Sancionados

De conformidad con las disposiciones sustantivas del Estado de México, la viuda, cónyuge supérstite o concubina que tenga conocimiento o sospecha de encontrarse embarazada al momento de la muerte del autor de la sucesión, tiene la obligación civil de dar aviso formal al Juez de lo Familiar o al Notario que conozca del trámite sucesorio. Este aviso debe formalizarse dentro del término perentorio de cuarenta días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del deceso del causante.

El propósito de este aviso no es meramente estadístico o administrativo, sino que busca notificar formalmente a los demás interesados en la herencia (herederos instituidos en testamento previo o parientes en línea directa con derecho a la sucesión legítima) sobre la existencia de un heredero preferente en gestación. Los coherederos legítimos o instituidos tienen el derecho correlativo de solicitar al Juez de lo Familiar que adopte las medidas pertinentes para confirmar la preñez, salvaguardando en todo momento el derecho a la intimidad y la dignidad de la madre.

Suspensión de la Partición Material de los Bienes

El efecto procesal más trascendental del aviso de preñez en el Estado de México es la ****suspensión inmediata de la división material de la masa hereditaria****. La legislación mexiquense prohíbe de forma tajante que los albaceas o los coherederos realicen la partición y adjudicación definitiva de los bienes mientras no se verifique el alumbramiento o el transcurso del plazo biológico máximo de gestación.

Esta medida suspensiva evita que se transmitan propiedades que posteriormente deban ser restituidas, impidiendo la dispersión del caudal patrimonial. No obstante, la suspensión afecta únicamente a la partición material; los trámites del juicio sucesorio (tales como las secciones de inventario, avalúo y administración de los bienes) continúan su curso legal ordinario a través del albacea para asegurar que el patrimonio se conserve productivo e íntegro.

Ministración de Alimentos con Cargo al Caudal Común

Durante el periodo que comprende la gestación y hasta el momento del parto, la madre tiene el derecho inalienable de percibir una pensión alimenticia calculada con cargo directo a la masa hereditaria, con independencia de si el hijo póstumo resulta finalmente instituido como heredero universal o legatario. Esta disposición constituye una carga preferente sobre el caudal común, lo que significa que los alimentos de la madre gestante deben cubrirse antes de liquidar legados o de pagar deudas ordinarias de la herencia.

Tratadistas como Rafael Rojina Villegas señalan que esta pensión alimenticia cumple con una doble función protectora: por un lado, asegura la subsistencia digna de la madre y, por el otro, garantiza las condiciones de salud necesarias para el correcto desarrollo biológico del futuro heredero. En el supuesto de que el nacimiento no llegue a verificarse (aborto) o que el producto no nazca vivo y viable (que no sobreviva veinticuatro horas desprendido enteramente del seno materno o no sea presentado vivo ante el Registro Civil), las sumas entregadas a la madre por concepto de alimentos no están sujetas a devolución o restitución, quedando consolidadas a su favor por tratarse de un derecho de orden público e interés social.

Doctrina y Naturaleza de la Aceptación y Repudiación de la Herencia

La delación hereditaria es el llamamiento formal que la ley o el testador hacen a una persona para suceder al difunto. Sin embargo, dicho llamamiento no convierte automáticamente al convocado en heredero de forma irrevocable; es indispensable un acto de voluntad voluntario para consolidar o rechazar dicha calidad. Así, la aceptación y la repudiación son las dos manifestaciones jurídicas bilaterales o unilaterales mediante las cuales el llamado a la herencia define su posición frente a la sucesión.

En el derecho civil del Estado de México, ambos actos comparten características esenciales de carácter dogmático y legal:

Unilateral

Nacen y surten efectos con la exclusiva manifestación de voluntad del llamado, sin requerir el consentimiento de los demás coherederos ni del albacea.

Perfecciona de forma individual el derecho sucesorio del manifestante.

Libre

Deben emitirse sin coacción, violencia moral, error, dolo o fraude. Cualquier vicio en la voluntad faculta la impugnación del acto.

Garantiza la autonomía de la voluntad del sucesor.

Irrevocable

Una vez expresada la aceptación o la repudiación de forma legal, el heredero no puede retractarse ni modificar su decisión, salvo por dolo o alteración del testamento.

Aporta certeza y seguridad jurídica a la masa hereditaria y a los acreedores.

Puro y Simple

No pueden subordinarse a plazos, términos o condiciones. La adición de cualquier modalidad invalida el acto en su totalidad.

Evita la suspensión o el condicionamiento superveniente de la titularidad de los bienes.

Indivisible

No se permite aceptar una porción del derecho hereditario y rechazar otra. Se asume o se descarta la institución de forma global.

Impide la fragmentación caprichosa de las cargas y los derechos de la masa.

El Efecto Retroactivo de la Manifestación Volitiva

De conformidad con las reglas del Libro Sexto del Código Civil mexiquense, tanto la aceptación como la repudiación producen efectos de carácter retroactivo que se remontan al momento preciso del fallecimiento del autor de la sucesión. Este principio de retroactividad es fundamental para evitar la existencia de un vacío de titularidad sobre los bienes (bienes vacantes o herencia yacente).

Cuando un heredero acepta la herencia, la ley determina que ha sido propietario y poseedor de los bienes desde el segundo exacto de la muerte del causante, validando de forma retroactiva cualquier acto de conservación o administración que hubiese realizado. Por el contrario, si el convocado repudia la herencia, se genera la ficción jurídica de que ****jamás fue llamado a la sucesión****, y su porción acrece de forma inmediata a los demás coherederos o activa las reglas de la sucesión legítima a favor de los parientes del siguiente grado.

Excepción a la Indivisibilidad: Coexistencia de Títulos

Aunque la regla general sanciona con nulidad la aceptación parcial, la doctrina y la legislación del Estado de México contemplan una excepción clara fundada en la dualidad de títulos sucesorios. Si un sujeto es instituido de forma simultánea en la misma sucesión como ****heredero**** (a título universal) y como ****legatario**** (a título particular), goza de la facultad de aceptar la herencia y repudiar el legado, o bien, aceptar el legado y repudiar la herencia. Esta regla respeta la independencia de las disposiciones del testador, permitiendo que el instituido decline el carácter universal (para no asumir la gestión de los pasivos y cargas de la masa) pero conserve el derecho específico sobre el bien determinado que le fue asignado como legado.

Formalidades de la Aceptación de la Herencia

El legislador del Estado de México reconoce dos formas válidas a través de las cuales se puede perfeccionar la aceptación del caudal hereditario, distinguiendo entre la manifestación expresa y los actos presuntivos:

Aceptación Expresa

La aceptación es expresa cuando el heredero manifiesta su voluntad de forma indubitable mediante el uso del lenguaje escrito. Esta modalidad se concreta de manera ordinaria a través de las promociones iniciales presentadas ante el Juez de lo Familiar dentro del juicio sucesorio testamentario o intestamentario, o bien, mediante comparecencia formal plasmada en acta o escritura pública ante un Notario Público en ejercicio de sus funciones. En este documento, el llamado declara bajo protesta de decir verdad que asume plenamente los derechos y obligaciones derivados de la institución.

Aceptación Tácita

Por otro lado, la aceptación es tácita cuando el llamado no manifiesta su voluntad por escrito, pero ejecuta actos materiales, jurídicos o de disposición que suponen de forma necesaria su intención inequívoca de heredar; es decir, actos que carecería de derecho a realizar si no ostentara la calidad de propietario de los bienes.

Para evitar confusiones, los tribunales y los tratadistas distinguen entre los actos de administración ordinaria y los actos de disposición patrimonial:

Actos que SÍ constituyen aceptación tácita: La enajenación o arrendamiento de un inmueble de la herencia, el pago de deudas del causante utilizando dinero líquido de la masa, o la promoción de demandas judiciales para recuperar posesiones de la herencia frente a terceros.

Actos que NO constituyen aceptación tácita: Los actos de mera conservación, protección o defensa urgente de los bienes, tales como reparar el techo dañado de una finca para evitar su derrumbe, resguardar llaves o pagar los gastos de funeral del de cujus. Estos actos se consideran gestiones de negocios por solidaridad o urgencia y no implican la asunción de la herencia.

Formalidades Estrictas de la Repudiación de la Herencia

A diferencia de la aceptación, la cual permite la modalidad tácita para facilitar la continuidad de la propiedad, la ****repudiación de la herencia**** está sujeta a un régimen de formalidad estricta y solemne en el Estado de México. La ley prohíbe de manera absoluta la repudiación tácita o presuntiva. Para que la repudiación sea válida, produzca efectos legales y libere al llamado de las cargas de la sucesión, debe

formularse invariablemente por escrito y cumplir con alguno de los siguientes requisitos formales previstos en la ley civil mexiquense:

Mediante la presentación de un escrito formal ratificado ante el ****Juez de lo Familiar**** que conozca del procedimiento sucesorio.

A través de una ****Escritura Pública**** otorgada ante un Notario Público, especialmente útil cuando el trámite sucesorio se lleva de forma extrajudicial o cuando el heredero radica en un distrito judicial diferente.

Esta severidad formal responde a la necesidad de otorgar certeza plena a los acreedores de la herencia y a los coherederos, ya que la renuncia altera directamente el destino de los bienes y redefine quiénes asumirán los pasivos del causante. Un escrito simple o una manifestación verbal carecen de toda validez y se tendrán por no realizados.

La Repudiación en Fraude de Acreedores

Un aspecto regulado con rigor por el ordenamiento del Estado de México es la protección de los derechos de terceros frente a la repudiación maliciosa. Si un heredero insolvente repudia una herencia con la finalidad deliberada de evitar que sus bienes sean embargados por sus acreedores personales, la ley faculta a estos últimos para solicitar al Juez de lo Familiar una autorización judicial que les permita ****aceptar la herencia en nombre del heredero deudor****.

En este supuesto, la repudiación no se nulifica en beneficio del deudor, sino que se suspende de forma parcial en la medida estrictamente necesaria para que los acreedores cobren sus créditos vigentes con los bienes que le correspondían. Si una vez liquidadas las deudas de los acreedores quedara un remanente económico del caudal hereditario, dicho excedente no se entregará bajo ninguna circunstancia al heredero que renunció, sino que se distribuirá entre los coherederos legítimos a quienes correspondía la porción de acuerdo con las reglas de acrecentamiento.

CAPÍTULO VI. EL ALBACEA E INTERVENTOR

El derecho sucesorio en el Estado de México regula de manera estricta y detallada el destino del patrimonio de una persona tras su fallecimiento. Dentro de este entramado jurídico, la transmisión de bienes, derechos y obligaciones no opera de forma automática o desorganizada; requiere la intervención de órganos especializados que

garanticen la legalidad, la equidad y el estricto cumplimiento de la voluntad del de cujus o, en su defecto, de las disposiciones supletorias de la ley. Estos órganos fundamentales son el albacea y el interventor.

El albacea se erige como el órgano ejecutor supremo de la sucesión, asumiendo la representación legal de la masa hereditaria, la administración de los bienes relictos y la delicada tarea de liquidar el patrimonio para su posterior adjudicación. Por su parte, el interventor surge como un contrapeso democrático y de vigilancia, cuya función primordial es fiscalizar las actuaciones del albacea para salvaguardar los derechos de los herederos disidentes, legatarios o acreedores. El estudio pormenorizado de ambas instituciones es indispensable para comprender la dinámica del juicio sucesorio testamentario e intestamentario en la legislación mexicana.

Definición y Naturaleza Jurídica del Albaceazgo

Doctrinalmente, autores clásicos mexicanos como Rafael Rojina Villegas conceptualizan al albaceazgo no como un simple mandato, sino como un cargo público de interés privado, una institución jurídica especial del derecho de sucesiones. El Código Civil del Estado de México (CCEM) lo regula en su Libro Sexto, determinándolo como el órgano ejecutor de la sucesión, encargado de administrar el patrimonio relictivo y llevar a cabo las disposiciones del testamento o los mandatos de la ley en el intestado.

Su naturaleza jurídica ha sido ampliamente debatida. Si bien guarda similitudes con el contrato de mandato (en cuanto a la realización de actos jurídicos por cuenta de otro), se diferencia sustancialmente de este porque el mandato termina con la muerte del mandante, mientras que el albaceazgo nace, precisamente, a partir del deceso del autor de la herencia. Asimismo, el albacea no es un representante exclusivo de los herederos, sino de la sucesión en su conjunto, lo que incluye la protección de los derechos de los acreedores de la masa hereditaria.

Características Esenciales del Cargo de Albacea

De acuerdo con la doctrina patria y las disposiciones normativas vigentes en el Estado de México, el cargo de albacea posee notas distintivas rigas que determinan su ejercicio:

Carácter Voluntario pero Obligatorio post-aceptación: Nadie puede ser obligado a aceptar el cargo de albacea; el testador o los herederos lo proponen libremente. Sin embargo, conforme a las reglas del CCEM, una vez que el designado acepta el cargo de forma expresa o tácita (realizando actos que presupongan su ejercicio), se genera la obligación legal de desempeñarlo de forma continua. La renuncia posterior solo es

admisible por excusa legal debidamente calificada por el juzgador (como enfermedad grave, avanzada edad o incompatibilidad de funciones).

Personalísimo (Intuito Personae): El cargo se otorga en atención a las cualidades morales, de confianza y de capacidad del designado. Por lo tanto, el albacea no puede delegar el cargo en un tercero ni transmitirlo por herencia a sus propios sucesores. No obstante, la legislación permite que el albacea otorgue poderes notariales para actos específicos (como pleitos y cobranzas o actos de administración concretos), pero la responsabilidad última de la gestión sigue recayendo exclusivamente sobre él.

Temporalidad con Prórroga Restringida: El albaceazgo no es una situación jurídica perenne. La ley general y local fijan un plazo de un año para el cumplimiento de su encargo, contado a partir de su aceptación o del momento en que se terminen los inventarios. Este plazo tiene por objeto evitar la prolongación innecesaria de los juicios sucesorios. Los herederos pueden prorrogar este término por un año más si existe causa justificada y se aprueban las cuentas anuales.

Oneroso por Mandato Legal: El ejercicio del albaceazgo genera el derecho a recibir una justa retribución económica, rompiendo con la antigua concepción del cargo honorífico. Esta retribución puede ser fijada libremente por el testador en el cuerpo del testamento. A falta de disposición testamentaria, el Código Civil del Estado de México suple la omisión fijando un porcentaje que oscila entre el 2% y el 5% sobre el importe líquido de los bienes, dependiendo de la complejidad de la administración y la cuantía del caudal hereditario.

Capacidad e Incapacidad para ser Albacea

No cualquier persona puede asumir la responsabilidad de un albaceazgo. El legislador mexiquense busca proteger el patrimonio sucesorio exigiendo plena capacidad de ejercicio. Tienen incapacidad legal para ser albaceas (salvo que sean herederos únicos): los magistrados y jueces que ejerzan jurisdicción en el lugar del juicio, los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo, los condenados por delitos contra la propiedad, y aquellos que no tengan un modo honesto de vivir.

Obligaciones Fundamentales del Albacea

El actuar del albacea está estrictamente calendarizado y procesalizado. El incumplimiento de cualquiera de estas fases puede dar lugar a su remoción inmediata y a la exigencia de daños y perjuicios por parte de los interesados.

Fase 1: Presentación del Testamento y Apertura de la Sucesión

El albacea testamentario tiene el deber ineludible de presentar el testamento ante las autoridades civiles o notario público dentro de los plazos legales establecidos tras conocer el fallecimiento del autor. Asimismo, debe promover la apertura de la sucesión y notificar a los presuntos herederos para comparecer a deducir sus derechos.

Fase 2: Aseguramiento de los Bienes del Caudal Hereditario

Antes de proceder a la liquidación, el albacea debe tomar posesión material y jurídica de los bienes que integran la masa hereditaria. Esta obligación implica realizar todos los actos necesarios para asegurar la conservación de los bienes, evitando pérdidas, robos, deterioros o dilapidación por parte de terceros o de los propios coherederos. Puede solicitar el apoyo de la fuerza pública o medidas precautorias judiciales si es necesario.

Fase 3: Formulación de Inventarios y Avalúos

Es una de las obligaciones más solemnes. El albacea debe formular el inventario físico detallado de todos los activos (bienes muebles, inmuebles, créditos, acciones) y pasivos (deudas) de la herencia. Paralelamente, debe contratar peritos valuadores autorizados para determinar los avalúos comerciales reales de dichos bienes. Una vez concluidos, se les dará vista a los interesados (herederos, legatarios, acreedores) por el término de ley para su oportuna aprobación u objeción.

Fase 4: Administración y Rendición de Cuentas

El albacea administra el negocio sucesorio: cobra rentas, recauda frutos, atiende la conservación física. El Código del Estado de México le impone la obligación estricta de rendir cuentas anuales de su gestión, así como una cuenta general al concluir el encargo. Estas cuentas deben detallar minuciosamente cada ingreso y egreso, acompañadas de los comprobantes fiscales y recibos correspondientes.

Fase 5: Pago de Deudas Sucesorias y Legados

Antes de repartir la herencia, se debe proceder a la liquidación del pasivo conforme al siguiente orden de prelación legal:

1. Deudas mortuorias (gastos de funeral y última enfermedad del testador).
2. Gastos de rigurosa administración y conservación de los bienes.
3. Deudas hereditarias exigibles y créditos fiscales.
4. Pago de los legados instituidos por el testador.

Fase 6: Garantía del Manejo de la Administración

Para garantizar el correcto uso de los fondos y responder por negligencias, el albacea está obligado a otorgar garantía mediante fianza, hipoteca o prenda. El monto se calcula en proporción al valor de los bienes a administrar. Esta obligación subsiste a menos que el testador lo haya dispensado expresamente en su testamento, o que los herederos decidan unánimemente eximirlo de tal deber.

Fase 7: Proyecto Definitivo de Partición y Adjudicación

Una vez aprobado el inventario y liquidadas las deudas, el albacea debe presentar el proyecto definitivo de partición de los bienes remanentes entre los herederos declarados, respetando las porciones testamentarias o legítimas. Aprobado el proyecto, se procede a la escrituración y adjudicación material de los bienes de forma individual.

Formulación de Inventario y Avalúo

Debe iniciarse dentro de los 10 días siguientes a la aceptación del cargo y concluirse en un plazo de 60 días. Prorrogable por el juez por causa justificada hasta por 60 días más.

Duración del Cargo de Albacea

Un año natural contado desde la aceptación del cargo o conclusión de inventarios. Prorrogable unánimemente por los herederos hasta por 1 año más.

Retribución del Albacea (Sin disposición del testador)

Entre el 2% y el 5% del importe líquido de los bienes heredados. Fijado judicialmente considerando el trabajo y la cuantía de los bienes.

Rendición de Cuentas

Obligatoria de forma anual y al finalizar el cargo de forma definitiva. El incumplimiento es causa directa de remoción del cargo sin derecho a honorarios.

Régimen de Prohibiciones y Responsabilidad Civil

La legislación civil del Estado de México impone severas restricciones al albacea con la finalidad de evitar conflictos de interés, desvíos patrimoniales o el abuso de poder en perjuicio de los sucesores. El principio rector establece que el albacea es un mero poseedor derivado y administrador del patrimonio ajeno, careciendo de derechos reales sobre la masa hereditaria.

Prohibición Absoluta de Enajenar y Gravar: El albacea tiene estrictamente prohibido vender, hipotecar, donar o gravar los bienes de la herencia por decisión unilateral. La

única excepción a esta regla ocurre cuando la venta sea estrictamente necesaria para el pago de deudas urgentes, gastos mortuorios o legados en efectivo, y para ello se requiere obligatoriamente el consentimiento por escrito y unánime de todos los herederos, o en su defecto, una autorización expresa del juez de la causa tras justificar plenamente la necesidad.

Limitaciones contractuales de Arrendamiento: El albacea no puede celebrar contratos de arrendamiento sobre los bienes de la masa hereditaria por un plazo mayor a un año. Un arrendamiento a largo plazo podría mermar el valor comercial del inmueble o retrasar injustificadamente la partición y adjudicación final de los bienes.

Prohibición de Adquisición Propia (Autocontratación): Bajo ninguna circunstancia (ni por sí mismo ni por medio de interpósita persona) puede el albacea comprar o adquirir los bienes de la herencia que administra. Esta prohibición doctrinal busca preservar la transparencia absoluta y evitar que el administrador manipule los avalúos para adquirir el patrimonio relicto a precios inferiores al mercado.

La Figura del Interventor en el Proceso Sucesorio

Para evitar el absolutismo del albacea y dotar al procedimiento de un sistema de pesos y contrapesos eficaces, el derecho sucesorio consagra la figura del interventor. El interventor actúa única y exclusivamente como un órgano de vigilancia sobre los actos y la gestión financiera del albacea. A diferencia de este, el interventor carece por completo de facultades de administración, representación jurídica o posesión material de los bienes de la herencia. Su misión es observar, fiscalizar y reportar cualquier anomalía al juez o a los interesados.

Interventor Provisional

Es aquel que designa el juez de lo civil o familiar al inicio del juicio sucesorio (ya sea testamentario o intestado), antes de que se nombre o acepte el cargo de albacea definitivo. Su función primordial es de carácter eminentemente conservativo y precautorio: debe asegurar los bienes, evitar el ocultamiento de activos y vigilar que no se dilapide el patrimonio en los primeros momentos del fallecimiento del autor.

Interventor Definitivo

Es forzoso y su nombramiento deriva de supuestos de desconfianza o de protección de minorías contemplados taxativamente en el Código Civil del Estado de México:

Cuando los herederos disidentes que representen al menos el 25% del capital o caudal hereditario no estén conformes con el nombramiento del albacea realizado por la

mayoría de los herederos. El legislador protege a la minoría dándoles la facultad de nombrar un vigilante permanente.

Cuando existan legatarios instituidos en el testamento cuya cuota o parte represente o exceda el 25% de la herencia, con la finalidad de vigilar que el albacea liquide adecuadamente el pasivo y respete sus asignaciones particulares.

Cuando la herencia sea instituida a favor de la beneficencia pública o entidades del Estado, para asegurar el correcto destino de los fondos públicos.

CAPÍTULOS VII Y VIII. LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA HERENCIA

El proceso sucesorio es un conjunto ordenado de etapas procesales que tiene como fin último la transmisión ordenada del patrimonio de una persona fallecida a sus herederos y legatarios. Una vez superadas las etapas de delación, declaración de herederos y el inventario y avalúo de los bienes, el juicio sucesorio se encamina hacia su fase de resolución material. Esta fase conclusiva se divide en dos momentos fundamentales de naturaleza jurídica, contable y económica distinta: la liquidación de la masa hereditaria y la partición de los bienes relictos.

Tanto la doctrina civilista clásica mexicana como la legislación vigente del Estado de México establecen que no es posible adjudicar o repartir bienes sin antes haber saneado el patrimonio de la sucesión. El principio general establece que 'antes es pagar que heredar'. Por ende, el estudio de los Capítulos VII y VIII exige una revisión exhaustiva de las reglas de prelación de créditos, los efectos retroactivos de la adjudicación, el régimen de distribución provisional de frutos y la responsabilidad solidaria y recíproca nacida de la evicción sucesoria.

La Liquidación Sucesoria: Naturaleza y Saneamiento Financiero

La liquidación es la fase contable, económica y de saneamiento financiero del patrimonio que se realiza una vez aprobado judicial o notarialmente el inventario y avalúo. Doctrinalmente, autores como Rafael Rojina Villegas la definen como la operación u operaciones mediante las cuales se determina el caudal neto partible, deduciendo del activo bruto el importe total de los pasivos exigibles a cargo de la sucesión.

El Código Civil del Estado de México (CCEM) estipula de forma rigurosa que el albacea debe proceder a la liquidación de la herencia mediante el pago ordenado de las deudas

y obligaciones contraídas por el autor de la sucesión, así como las cargas nacidas a consecuencia de su fallecimiento. Este orden de pago es de carácter imperativo y de orden público, lo que significa que el albacea no puede alterarlo a su libre arbitrio ni dar preferencia a créditos ordinarios sobre créditos preferentes.

Orden de Prelación de Pagos según la Legislación del Estado de México

El legislador mexiquense ha agrupado los pasivos en clases jerárquicas con un orden de preferencia absoluto, el cual se describe minuciosamente a continuación:

Deudas Mortuorias: Comprenden estrictamente los gastos del sepelio, el funeral, la adquisición de la fosa, cripta o gastos de cremación, así como los honorarios médicos, medicamentos y hospitalización generados durante la última enfermedad del autor de la herencia. La ley confiere a este concepto la máxima prioridad financiera: deben pagarse de inmediato con los primeros fondos líquidos disponibles en la masa, incluso antes de la aprobación definitiva del inventario, dada la naturaleza de urgencia social e higiénica que revisten.

Gastos de Administración, Conservación y Créditos Alimenticios: En este segundo peldaño se ubican los honorarios de los abogados e intermediarios que intervienen en el juicio sucesorio, las contribuciones fiscales devengadas por los propios bienes inmuebles durante el juicio, las primas de seguros, las reparaciones urgentes y los sueldos o retribuciones del albacea. De igual manera, e intersectando con el derecho humano a la subsistencia, se incluyen aquí las pensiones alimenticias urgentes a cargo del difunto que deban seguir garantizándose a favor de los acreedores alimentarios sobrevivientes (hijos menores, cónyuge supérstite, ascendientes incapacitados).

Deudas Hereditarias propiamente dichas: Son todas aquellas obligaciones y créditos ordinarios contraídos por el testador en vida y que se encontraban vigentes al momento de su fallecimiento. Estos pasivos se transmiten a la masa hereditaria (no a la persona física del heredero, quien goza siempre del beneficio de inventario). El CCEM ordena que se liquiden rigurosamente según su orden de prelación legal: en primer término, los créditos con garantía real (hipotecas o prendas inscritas); en segundo término, los créditos fiscales locales o federales; y finalmente, las deudas quirografarias o comerciales ordinarias.

Pago de Legados: El legado constituye una asignación a título particular dispuesta expresamente por el testador. Jurídicamente, los legatarios son acreedores de la herencia respecto de su bien particular, pero su derecho está supeditado a la solvencia general de la masa. Una vez liquidados todos los pasivos anteriores (mortuorias, administración y deudas hereditarias), el albacea está en aptitud legal de proceder a

la entrega material y jurídica de los bienes legados a sus respectivos beneficiarios de forma específica.

La Partición de Bienes: Concepto y Mecánica Jurídica

Una vez que la masa hereditaria ha sido completamente liquidada y se ha determinado de manera exacta el remanente del patrimonio, cesa el estado de comunidad hereditaria latente y se da paso a la partición de bienes. La partición es el acto jurídico formal y abstracto mediante el cual la cuota alícuota, ideal e indivisa que corresponde a cada heredero sobre la universalidad de la herencia se transforma en bienes concretos, determinados, materiales y divisos asignados individualmente.

De acuerdo con Antonio de Ibarrola, mientras la partición no se efectúe, los herederos no son dueños de ningún bien en particular, sino copropietarios del todo en una proporción matemática. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México regula este derecho de manera imprescriptible: cualquier heredero con capacidad de ejercicio que tenga aprobadas las cuentas de administración puede exigir en cualquier momento que se formule el proyecto de partición.

Naturaleza Declarativa de la Partición Sucesoria

La doctrina civil mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido con firmeza la naturaleza declarativa de la partición, rechazando cualquier carácter constitutivo de derechos. Esto significa que la partición no transmite ni enajena la propiedad entre los coherederos en el acto de su firma o aprobación, sino que se limita a fijar, determinar y declarar qué bienes específicos le correspondían a cada heredero con carácter retroactivo desde el momento exacto de la muerte del de cujus.

Este efecto retroactivo es de suma importancia práctica: jurídicamente se considera que el heredero adjudicatario ha sido el dueño único y exclusivo de la cosa adjudicada desde el día del fallecimiento del autor, y que nunca tuvo derecho alguno sobre los demás bienes adjudicados a sus coherederos. Esto evita la doble tributación por transmisiones patrimoniales intermedias y dota de certeza jurídica a los actos de disposición previos.

Distribución Provisional y Definitiva de Frutos

Durante la tramitación del juicio sucesorio, los bienes de la masa hereditaria suelen seguir produciendo rendimientos económicos (como las rentas de locales comerciales, dividendos de acciones o intereses en cuentas de inversión bancaria). El principio general de accesión dictamina que los frutos pertenecen al heredero que

resulte dueño de la cosa que los produjo. Sin embargo, dado que la propiedad específica de cada bien se ignora hasta que se aprueba la partición final, el albacea está facultado para realizar una distribución provisional de dichos frutos para la subsistencia de los interesados.

Al concluir el proyecto de partición y adjudicación, se realiza un ajuste contable definitivo: si se evidencia que un heredero recibió frutos provisionales de un bien que finalmente fue adjudicado a otro coheredero, están obligados por mandato del CCEM a abonarse, restituirse y compensarse recíprocamente dichos conceptos económicos. Cabe destacar que, por regla protectora del patrimonio familiar, los frutos no responden de las deudas del de cujus si el capital base de los bienes es suficiente para cubrirlas por completo.

Evicción Sucesoria y Obligación Recíproca de Saneamiento

La igualdad y la equidad deben regir el resultado de la partición. Por ello, la ley establece que una vez aprobada la partición y efectuada la adjudicación, los coherederos quedan obligados recíprocamente a indemnizarse y sanear en caso de evicción. La evicción sucesoria se presenta cuando un heredero pierde, en todo o en parte, el bien concreto que le fue adjudicado en la partición, en virtud de una sentencia judicial definitiva dictada a favor de un tercero por un derecho anterior al fallecimiento o a la partición misma.

El pasivo económico derivado de esta indemnización por evicción no debe ser soportado en solitario por el heredero afectado; se distribuye obligatoriamente entre todos los coherederos de forma proporcional a sus respectivas cuotas hereditarias, actuando como un seguro mutualista de equidad. La obligación de saneamiento solo cesa en tres supuestos taxativos: cuando el testador lo haya excluido expresamente en el testamento, cuando la evicción ocurra por culpa exclusiva del heredero adjudicatario (por ejemplo, por no defender el bien adecuadamente en juicio), o cuando el heredero hubiere renunciado al derecho de saneamiento con posterioridad a la partición.

Deudas Mortuorias

Gastos de funeral, ataúd, fosa, cremación y honorarios médicos/hospitalarios de la última enfermedad. Pago inmediato. Tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra obligación de la masa.

Cargas de Administración

Honorarios de abogados, sueldos del albacea, conservación de inmuebles, impuestos prediales y pensiones alimenticias. Se liquidan de forma preferente con los fondos líquidos una vez aprobada esta sección contable.

Deudas Hereditarias

Créditos hipotecarios, deudas fiscales previas, préstamos bancarios y pagarés firmados por el de cujus en vida. Se pagan con los bienes restantes respetando las preferencias legales de acreedores y garantías reales.

Legados Particulares

Bienes muebles, joyas, inmuebles específicos o sumas de dinero determinadas dejadas a una persona en el testamento. Se entregan únicamente si el remanente de los activos es suficiente para cubrir la totalidad del pasivo hereditario.

CAPÍTULO IX. PROCEDIMIENTOS SUCESORIOS (JUDICIAL Y NOTARIAL)

La materialización del derecho sucesorio sustantivo requiere de un cauce procesal formal que dote de validez, publicidad y seguridad jurídica a la transmisión del patrimonio relicto. En el Estado de México, el legislador ha diseñado un sistema adjetivo flexible pero riguroso que permite a los interesados optar por diversas vías procesales atendiendo a la existencia o ausencia de conflicto, la capacidad de ejercicio de los llamados a heredar y el grado de parentesco con el autor de la sucesión.

El estudio del Capítulo IX aborda de forma sistemática las tres vías procedimentales consagradas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (CPCEM): el Juicio Sucesorio Judicial Ordinario, caracterizado por su división en cuatro secciones autónomas; el Procedimiento Extrajudicial ante Notario Público, concebido como un mecanismo alternativo de jurisdicción voluntaria; y el Procedimiento Especial en los Intestados, una vía sumaria introducida para agilizar de manera drástica las transmisiones patrimoniales en el seno familiar directo cuando no existe controversia.

El Juicio Sucesorio Judicial Ordinario y sus Características

De acuerdo con la doctrina procesal civil mexicana (notablemente expuesta por Cipriano Gómez Lara), el juicio sucesorio por la vía judicial es un proceso universal, doble, declarativo y atractivo. Es universal porque abarca la totalidad del patrimonio del difunto (bienes, derechos y obligaciones); es doble porque tanto herederos como

legatarios y acreedores pueden actuar simultáneamente como actores o demandados dentro del mismo cauce; es declarativo porque reconoce derechos preexistentes nacidos de la ley o el testamento; y es atractivo porque ejerce vis atractiva sobre cualquier otro juicio civil o patrimonial que involucre al de cujus.

El CPCEM establece de forma imperativa que todo juicio sucesorio ordinario debe dividirse formal y obligatoriamente en cuatro secciones autónomas. Esta división por piezas separadas permite que el litigio u objeción en una etapa avanzada no paralice las determinaciones firmes alcanzadas en las fases previas.

Sección Primera (De Sucesión): Constituye la apertura formal del procedimiento. Comprende la denuncia escrita de la herencia (testamentaria o intestada), la exhibición obligatoria del acta de defunción, y la solicitud de informes oficiales al Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y al Archivo General de Notarías sobre la existencia o inexistencia de disposiciones testamentarias previas. En los casos de intestado (sucesión legítima), incluye la publicación de edictos en el boletín judicial y periódicos de mayor circulación para convocar a colaterales o interesados. Concluye con la junta de herederos, el reconocimiento formal de sus derechos y el nombramiento y aceptación del cargo de albacea.

Sección Segunda (De Inventarios): Se enfoca de forma exclusiva en la determinación física y valuación del patrimonio. Concentra la obligación del albacea de formular los inventarios detallados de los activos y pasivos de la masa, así como los avalúos comerciales correspondientes elaborados por peritos autorizados. En esta sección se tramitan los incidentes de exclusión de bienes (cuando se alega que un bien inventariado pertenece a un tercero o a la sociedad conyugal) o las oposiciones al inventario. Culmina con la resolución judicial o auto de aprobación definitiva.

Sección Tercera (De Administración): Es de naturaleza netamente contable y de gestión. Contiene los informes periódicos y las cuentas anuales de administración que el albacea debe rendir obligatoriamente ante el juzgado y los herederos. Asimismo, registra las constancias de los pagos efectuados respecto a las deudas mortuorias, los gastos corrientes de conservación, el cumplimiento de obligaciones fiscales y las actas relativas a la distribución provisional de frutos autorizada por el juez.

Sección Cuarta (De Partición): Es la fase resolutive del juicio. Incluye el proyecto definitivo de partición material de los bienes elaborado por el albacea o, en su defecto, por un partidador designado judicialmente. Comprende también los convenios privados que celebren los coherederos para la distribución de la masa. Una vez resueltas las objeciones y aprobado el proyecto por el juzgador, se dicta la sentencia definitiva de

adjudicación formal, ordenando la protocolización ante el notario de la elección de los interesados para la expedición de los títulos de propiedad individuales.

El Procedimiento Sucesorio Extrajudicial ante Notario Público

La tramitación sucesoria extrajudicial ante Notario Público representa una vía sumamente expedita y desahogada de jurisdicción voluntaria. Su propósito es descongestionar la carga de los tribunales familiares del Estado de México y ofrecer un servicio rápido a los ciudadanos. Sin embargo, por razones de seguridad jurídica y orden público, la legislación mexiquense restringe esta vía exigiendo de manera concurrente tres requisitos estrictos:

Capacidad de Ejercicio Total: Todos los herederos o legatarios instituidos deben ser mayores de edad, menores emancipados o personas jurídicas (entidades morales). No se permite esta vía si existe algún menor de edad o persona sujeta a interdicción sin representación legal consolidada.

Ausencia Absoluta de Conflicto: Debe existir unanimidad y armonía total entre los interesados. En el momento en que surja cualquier tipo de controversia, pleito u oposición por parte de un presunto heredero, acreedor o legatario, el Notario Público está obligado por ley a suspender su actuación y remitir de inmediato el expediente al juzgado civil competente.

Criterio de Competencia Territorial: En el Estado de México, el CPCEM y la Ley del Notariado local establecen las reglas de competencia para el Notario. (Nota de corrección normativa: A diferencia de la redacción histórica o de otras entidades federativas que vinculan erróneamente la competencia a la Ciudad de México, en el Estado de México es indispensable que el último domicilio del de cujus haya estado ubicado dentro del territorio del Estado de México, o bien, que en dicha entidad federativa se localice el grueso de los bienes inmuebles que integran el caudal hereditario).

Bajo esta vía, el Notario Público redacta una primera acta de radicación donde hace constar los informes de los archivos de notarías, recibe la declaración testimonial de estilo, asienta la aceptación formal de la herencia y el cargo de albacea. Posteriormente, protocoliza el inventario y avalúo unánime y, finalmente, eleva a escritura pública el convenio de partición y adjudicación final, el cual se inscribe en el Instituto de la Función Registral (IFREM) para surtir efectos plenamente frente a terceros.

Del Procedimiento Especial en los Intestados (Vía Sumaria Familiar)

Una de las reformas más vanguardistas incorporadas al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es la creación del Procedimiento Especial en los Intestados. Concebido como un juicio sumario o simplificado, permite unificar las etapas procesales tradicionales en una sola audiencia o acto jurídico concentrado, agilizando notablemente los tiempos de resolución que en la vía ordinaria podrían tardar meses o años.

Para acceder a esta vía privilegiada de simplificación procesal se deben reunir condiciones específicas de parentesco y orden formal. En primer lugar, es exclusivo para las sucesiones legítimas (intestados) donde los reclamantes sean el cónyuge supérstite, los descendientes (hijos, nietos) o los ascendientes (padres, abuelos), es decir, la línea recta familiar directa.

En segundo lugar, se impone una carga procesal rigurosa desde el escrito inicial de denuncia: los promoventes deben presentar al juez, de forma concomitante, las actas del registro civil que acrediten de forma indubitable el parentesco, el inventario detallado de los bienes relictos, los títulos de propiedad correspondientes, los avalúos comerciales vigentes y, de manera crucial, el convenio unánime de partición y adjudicación firmado por todos los interesados.

Recibida la denuncia con la totalidad de los anexos, el juez familiar del Estado de México solicita los informes de testamento de ley y convoca a una audiencia única. Si los informes confirman la inexistencia de testamento y no se presenta oposición de terceros, el juzgador dicta en ese mismo acto la sentencia declarativa de herederos y, de forma simultánea, aprueba el inventario y el convenio de partición, decretando la adjudicación inmediata de los bienes. Este procedimiento reduce los costos económicos del litigio y preserva la estabilidad emocional y económica del núcleo familiar.

Estructura

Cuatro secciones autónomas e independientes tramitadas de forma sucesiva. Actas notariales sucesivas y otorgamiento de escritura pública final. Concentrado en una sola audiencia y resuelto en un único acto procesal.

Requisito de Conflicto

Permite resolver controversias, incidentes y oposiciones mediante litigio. Requiere unanimidad absoluta. Ante cualquier oposición se remite al juez. Requiere convenio unánime previo desde el escrito inicial de denuncia.

Parentesco / Capacidad

Abierto a cualquier tipo de heredero (colaterales, extraños) y menores de edad.
Exclusivo para mayores de edad, emancipados o personas morales capaces.
Restringido a la línea recta familiar directa: cónyuge, descendientes y ascendientes.